

Guerras, territorios de muerte y resistencia en Colombia⁶²

Luis Carlos Castillo⁶³

INTRODUCCIÓN

El concepto guerra se utiliza recientemente para referirse al conflicto interno colombiano, uno de los más antiguos del mundo. Sin embargo, antes de la década de los noventa se usaban otros términos. Así, diversos analistas proponen la expresión La Violencia para nombrar el enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, que a mediados del siglo pasado arrojó cerca 180.000 muertes. A finales de los años ochenta, se habla de violencias para referir que múltiples actores y autores de violencias, con motivaciones diferentes, es lo que caracteriza el caso colombiano. Esta noción parecía dar más cuenta del fenómeno ya que destacaba la importancia cada vez mayor de los componentes urbanos del conflicto.

En rigor, el término guerra comienza a imponerse a partir del año 1995 cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua de América Latina y de mayor poderío militar, unos 20.000 hombres en armas, obtienen varios éxitos militares lo que lleva a diferentes analistas a plantear que esta agrupación armada estaba abandonando la tradicional guerra de guerrilla para pasar a la guerra de posiciones. Después del fracaso del proceso de paz adelantado por el ex presidente Misael Pastrana Borrero y de la política de mano dura del presidente Uribe, el concepto se extiende para referirse al conflicto colombiano (Pécaut, 2004).

No es nuestro objetivo entrar aquí en el amplio debate sobre el carácter de las “nuevas guerras” (Kaldor; 2001; Van Creveld, 1991) y sus diferencias con las “viejas guerras”, que analizó el general prusiano Von Carl Klausewitz (2005). Sin embargo, lo que deseamos resaltar es que el carácter que ha ido adquiriendo la guerra en Colombia la ha convertido en un obstáculo fenomenal para el ejercicio de las conquistas democráticas más importantes obtenidas por el ascenso de las nuevas etnicidades (Hall, 1991a, 1991b) colombianas. Esta guerra, de la que se dijo que obedecía a la falta de democracia en Colombia y que el antídoto más eficaz para controlarla era la ampliación de los espacios democráticos (Comisión de estudios sobre la violencia; 1987) ha generado un movimiento de resistencia de los actores étnicos que usan diferentes estrategias para defender conquistas como la autonomía territorial y el funcionamiento de sus formas tradicionales de gobierno.

El conflicto colombiano, que ante la importancia mediática que ha adquirido la invasión de Irak se ha convertido en una guerra olvidada, tal como lo calificó el Informe de Amnistía Internacional del año 2003 (Oslender, 2004b: 61), combina de manera compleja rasgos de las viejas y de las nuevas guerras. De las primeras, porque guerrillas y paramilitares, de manera similar a los Estados modernos, buscan controlar territorios, aunque éstos no correspondan a fronteras estables. El famoso principio clausewitziano de que la “guerra no es más que la continuación de la política por otros medios”, aquí se desdibuja porque cada vez más se convierte en una actividad por sí misma, en la que las motivaciones de los actores son menos ideológicas y más económicas. Parecería que los objetivos políticos, la transformación de la sociedad para la construcción de otra más igualitaria, son una especie de pretexto frente a objetivos económicos más poderosos como la obtención de rentas provenientes del negocio de las drogas.

En las guerras modernas se respetaba la distinción entre militares y dirigentes políticos (éstos no podían ser tomados como objetivos) y entre combatientes y población civil. En el conflicto colombiano actual tales distinciones no existen.

En efecto, los dirigentes políticos, más que los militares, son uno de los objetivos fundamentales de la guerra. Así, las FARC han declarado objetivo militar a muchos de los dirigentes que “harían parte del “establecimiento”. Al lado de decenas de militares a los que consideran prisioneros de guerra, tienen retenidos a cerca de 60 líderes entre los que se encuentra una ex candidata presidencial.

⁶² Esta ponencia ha sido elaborada en el marco de la investigación de la tesis doctoral: *El Estado-nación pluriétnico y multicultural colombiano: La lucha por el territorio en la reimaginación de la nación y reinención de la identidad étnica de negros e indígenas.*

⁶³ Sociólogo, profesor de la Universidad del Valle, Cali-Colombia.

Al desaparecer la distinción entre combatiente y civiles, la población es la principal víctima del conflicto. Más aún, los ataques en su contra se convierten en una forma de afectar al enemigo. Aquéllos adquieren la forma de la masacre, la instrumentalización del terror y el desplazamiento forzado. Como los actores armados son autosuficientes económicamente, gracias a los recursos económicos provenientes del negocio de las drogas, del secuestro y de la extorsión, poco les importa lo que piensen las comunidades por lo que privilegian el componente militar frente al político.

Los anteriores rasgos de la guerra colombiana, es decir, que los actores armados privilegien es su estrategia militar el control territorial, que instrumentalicen el terror para golpear al enemigo, que la población civil sea la principal afectada en términos de desplazamiento y muerte y el uso del negocio de los narcóticos para financiar el conflicto, la ha convertido en el principal obstáculo para que negros e indios disfruten de los recientes derechos que han conquistado gracias a los fuertes movimientos que han politizado la diferencia.

En efecto, el movimiento de negros e indios en Colombia, una expresión del ascenso de las nuevas etnicidades en América Latina, ha instrumentalizado la diferencia étnica y cultural para demandar al Estado-nación homogéneo derechos históricamente conculcados. Como resultado de esta lucha, la Constitución de 1991, que dio el golpe de gracia al proyecto de nación mestiza que durante más de siglo y medio impulsaron las elites políticas, reconoce que el fundamento de la nacionalidad se encuentra en la diversidad étnica y cultural.

A partir de esta fecha, se han producido cambios trascendentales en el reconocimiento de los derechos territoriales, políticos y culturales de indígenas y comunidades negras. Por ejemplo, en un hecho poco estudiado y comprendido, hoy el 28% del territorio nacional, cerca de 300.000 km², se encuentra bajo la categoría de tierras de resguardos y de comunidades negras. Esto significa que son territorios cuya propiedad colectiva está en manos de autoridades pertenecientes a las minorías étnicas dotadas de poderes políticos y administrativos reconocidos legalmente. Sin embargo, la guerra colombiana se está librando en toda su intensidad en estos vastos territorios. Por esta razón, la mayor conquista obtenida por movimiento étnico alguno en América está siendo convertida en territorios de terror y muerte. A continuación veremos como se está desarrollando este proceso en la Costa Pacífica colombiana, en donde han sido tituladas cerca de cinco millones de hectáreas como tierras de comunidades negras, y en los resguardos del departamento del Cauca, la región de mayor población indígena de Colombia.

1. LA GUERRA EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

1.1 Territorios de Terror y Muerte

La Costa Pacífica colombiana es una extensa franja de 1.300 kilómetros que se extiende desde la frontera con Panamá, al Norte, hasta los límites con el Ecuador, al Sur. Es una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, es decir, que tiene una de las más altas concentraciones de especies por área del mundo. Está surcada por caudalosos ríos, ya que es también una de las regiones de mayor pluviosidad del orbe, que nacen en la Cordillera Occidental, uno de los tres ramales en que se dividen los Andes en Colombia, y desembocan en el Océano Pacífico. En medio de la selva pluvial tropical, innumerables caños, quebradas y afluentes, estructuran grandes cuencas hidrográficas como la del Patía que se extiende a lo largo de 3.000 kilómetros (West, 1957) o la del San Juan, el río más caudaloso de todos los que desembocan en el Océano Pacífico de Sudamérica (West, 1957).

Desde el siglo XVII, la región ha estado articulada a los circuitos de comercio internacional en calidad de fuente de materias primas, cuya extracción ha generado ciclos de bonanzas y colapsos para responder a la demanda exterior (Whitten, 1986). Durante el Imperio colonial español fue la principal zona en la Nueva Granada de extracción de oro. Desde finales del siglo XIX y durante el XX, empresas norteamericanas extraen oro y platino a la vez que durante la primera mitad del XX se presenta un auge de la explotación de la tagua⁶⁴. Desde la Segunda Guerra Mundial, multinacionales de capital

⁶⁴ La tagua, también conocida como el marfil vegetal, es la semilla de varias palmas que crecen sólo en los bosques húmedos de Colombia, Panamá, Ecuador y Brasil. Es utilizada para la confección de botones, peines, prendedores y fichas de ajedrez, entre otros. Los indígenas wounann de la Costa Pacífica colombiana la utilizan desde tiempos inmemoriales para tallar figuras de animales. En la actualidad es empleada en la confección de múltiples artesanías. El español se interesó por la tagua desde su llegada a la Costa Pacífica en el siglo XVI. El periodo de auge de su explotación se da entre 1900 y 1920 cuando son exportadas grandes cantidades a los Estados Unidos, Londres y Hamburgo para la fabricación de

estadounidense incrementan la extracción de los ricos recursos maderables. Recientemente, la región ha sido considerada estratégica para los planes nacionales y para la industria farmacéutica con miras a explotar y conservar su gran bio-diversidad (Escobar, 1997; Oslender 2004a). En junio de 2001 habitaban en la Costa Pacífica unos 991.661 afrocolombianos, el 83% del total (Barbary y Urrea, 2004: 78). El resto está comprendido por población mestiza originaria del interior del país y por indígenas pertenecientes a los grupos étnicos emberá, wounaan, eperara-siapidara y tule.

Como resultado del movimiento de negritudes que se despliega antes y después de la citación de la Asamblea Nacional Constituyente, el Estado ha titulado cerca de cinco millones de hectáreas como tierras colectivas de comunidades negras que son administradas por consejos comunitarios elegidos democráticamente por las comunidades. Hoy, en estos territorios, otrora lugares de paz, se desarrolla la guerra colombiana en toda su intensidad.

Históricamente, el Pacífico colombiano había pertenecido a los “márgenes lejanos” de las principales olas de colonización y de control guerrillero. Incluso, la Guerra de los Mil Días, conflicto fratricida de finales del siglo XIX y comienzos del XX que produjo cerca de 100.000 muertes (Villegas y Yunis, 1979: 125), fue extraña a la zona. La región tampoco fue escenario de la especie de guerra civil de mediados del siglo XX, que como mostraron Fals, Guzmán y Umaña (1962) no afectó a todo el territorio nacional. Durante este episodio, por el contrario, fue un lugar de refugio de muchos de los que huían de la conflagración. Podemos decir que hasta la década de los noventa, cuando se despliega el amplio proceso de titulación de territorios colectivos negros, el Pacífico había sido un “Litoral recóndito” para la guerra.

En efecto, antes de esa década, mientras la guerra conocía un espiral sin antecedentes (Pécaut, 1987), las diferentes investigaciones de lo que en Colombia se conoce como “la geografía de la violencia” describían el Pacífico como un oasis de paz. Por el contrario, hoy, la región ha sido integrada plenamente el país nacional, pero a través de su peor faceta: la guerra, que ha llegado con su cortejo de horror, dolor, muerte, desplazamiento y des-territorialización. Antes, la guerra se vivía en esta zona como algo lejano, ahora se ha enquistado con la presencia de actores armados que mediante el uso ilegítimo de la fuerza operan como un supra poder que dicta órdenes de lo que deben hacer y no hacer las comunidades.

La guerra colombiana ha sido periférica, aunque en años recientes las guerrillas, en especial las FARC, han intentado llegar a los principales centros urbanos. En las zonas selváticas y de colonización, por la precaria presencia del Estado, se presentan las mejores condiciones para que surjan ejércitos no estatales. Por esta razón, la guerra en Colombia se ha ensañado principalmente con las poblaciones campesinas. Sin embargo, la expansión territorial del conflicto ha ido copando cada vez más zonas marginales, acercándose peligrosamente al “centro”.

La guerrilla colombiana ha sido históricamente marginal, como no ha podido acceder al poder ha jugado a la creación de un ejército antes que a la conformación de un partido político. Esto la ha llevado a privilegiar como estrategia militar la instauración de un “Estado embrionario” que debe garantizar el control del territorio y el ejercicio de poderes de *facto* sobre la población de las regiones en que opera (PNUD, 2003: 49). Dada la debilidad congénita del Estado colombiano en el ejercicio de la fuerza, la guerrilla ha ido copando cada vez más regiones de la periferia, es el caso del Pacífico colombiano. Y detrás de la guerrilla llegan los paramilitares creando muerte, terror y desplazamiento.

La estrategia militar de las FARC, derivada de su concepción de cómo tomar el poder por la vía armada (cercar las ciudades desde el campo), privilegia el control y la consolidación de territorios. Pero éstos deben tener ciertas características: débil presencia estatal, atributos geográficos que permitan desarrollar la guerra de guerrillas, facilidades de acceso a recursos económicos para financiar la guerra, población en condiciones de marginalidad que pueda ser reclutada por la fuerza, por el pago de un salario o por convicción ideológica. Para la década de los noventa del siglo pasado, todas estas características eran cumplidas por la Costa Pacífica colombiana.

En efecto, el Pacífico colombiano, por sus características geográficas, es decir, extensa e impenetrable selva, miles de canales que comunican con el mar, aislamiento geográfico y dificultades de comunicación, es un espacio geográfico propicio para las acciones tipo guerrilla y donde se dificultan los operativos terrestres y aéreos de las Fuerzas Militares. Además, en la zona se encuentra un gran “ejército de reserva”, jóvenes negros en condiciones de pobreza que encuentran en los actores armados una fuente de trabajo. Con un ingreso inferior los 700 dólares

botones, prendedores de alta calidad y joyería en general. Se estima que en este periodo el 20% de los botones producidos en los Estados Unidos era de tagua.

anuales, enrolarse con la guerrilla o con los paramilitares les garantiza un salario que sobrepasa con creces esa cifra. Por ejemplo, en el año 2004 los paramilitares ofrecían 400 dólares mensuales a los que ingresaban en sus filas.

Ahora, El Estado ha adelantado fumigaciones agresivas contra las plantaciones de coca en la selva amazónica, como resultado el cultivo se ha desplazado hacia el Pacífico, aprovechando el aislamiento geográfico y la salida al mar de esta zona. Así, la expansión militar de las FARC hacia esta región está asociada con la decisión estratégica de asegurar el corredor que va del Amazonas al Pacífico, que es una ruta crítica del narcotráfico. Por lo tanto, con su expansión territorial la guerrilla busca controlar zonas que le den ventajas estratégicas en la confrontación y recursos de las diferentes bonanzas, en este caso de la coca.

Hoy, las FARC tienen influencia militar en todo el Pacífico Colombiano. Desde Bahía Cupica, en límites con Panamá, hasta el río Mira, en la frontera con Ecuador, hay presencia de ocho frentes y compañías de este actor armado⁶⁵. El ELN es la otra guerrilla que también ha extendido su influencia en esta región colombiana a través de los frentes Hernán Jaramillo y Benkos Biohó, nombre de uno de los líderes cimarrones más conocido de la resistencia negra contra la esclavitud. Igualmente, al parecer, bajo la influencia del ELN comienza a operar el grupo Resistencia Cimarrón.

Pero, el fortalecimiento militar y económico de la guerrilla viene acompañado del surgimiento y expansión del paramilitarismo⁶⁶. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nacen como respuesta a la expansión de la guerrilla y al ser uno de sus objetivos fundamentales la “recuperación de los territorios controlados por las fuerzas insurgentes” se desata una guerra por el control territorial. De una presencia inicial en la década de los ochenta en Córdoba, Urabá y Magdalena Medio, en el 2003 los paramilitares habían creado 22 grupos que hacían presencia en 28 departamentos, de los 33 que tiene Colombia y les disputan el territorio a sangre y fuego a las guerrillas.

Como lo muestra el informe de desarrollo humano del PNUD del año 2003 en su cartografía sobre la expansión del paramilitarismo (PNUD, 2003: 63, mapa 2.9, presencia paramilitar 2002),

⁶⁵ La estructura militar de la FARC está compuesta de 62 frentes distribuidos en siete bloques, así: Oriental (22), Sur (10), Magdalena Medio (8), Nor-occidental (8), Central (59), Norte (59) y Occidental (4).

⁶⁶ Los grupos paramilitares, que se hacen conocer como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se autodefinen como una “organización civil en armas”. Surgen para sustituir al Estado en sus funciones de “garantizar la vida, el orden social y la paz ciudadana, el patrimonio económico, cultural y ecológico de la nación, la justicia social y económica, la libre participación democrática y la seguridad pública”. Aparecen en el escenario nacional colombiano a mediados de los años ochenta con la llamada “Contra-revolución de Urabá”, en el noroccidente del país (Romero, 2002). Ante la presencia y extorsión de la guerrilla, que se fortalece durante el proceso de paz con el gobierno Betancur, los ganaderos deciden armarse y enfrentarla. Desde 1995, comienzan a desplazarse hacia otros departamentos del centro y sur del país como El Cesar, La Guajira, Santander, Antioquia y Meta, regiones con fuerte presencia guerrillera, con la consigna de “recuperar” los territorios controlados por las fuerzas insurgentes. En 1995, el gobierno colombiano reconoce por primera vez la existencia de 128 grupos paramilitares (Wettsein, 1995) que a mediados de 1997 constituyen las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes a partir de 1998 se unifican en tres conjuntos regionales: Córdoba, Urabá y Magdalena. Los grupos de autodefensa no solamente han contado con la financiación de los ganaderos, grupos de narcotraficantes, empresarios mineros; en especial esmeralderos, grandes y medianos terratenientes, comerciantes y políticos locales se encuentran entre sus financiadores. Estos grupos han aplicado una estrategia político militar basada en tres principios: 1) limpiar aquellas zonas rurales en las que la población simpatiza y apoya a las guerrillas mediante matanzas ejemplares e indiscriminadas que siembran el terror y desplazan a la población. El espacio es rápidamente ocupado por los paramilitares y la maniobra culmina con el traspaso forzado de las tierras abandonadas. 2) Asesinar preventivamente aliados potenciales de la guerrilla en los cascos municipales para romper su red de apoyo logístico. 3) integrar verticalmente las organizaciones locales de autodefensa, bajo una estructura que pretende alcanzar el grado de centralidad de las FARC o del ELN, y, finalmente, 4.) Desarrollar una fraseología de tipo proyecto nacional-político- militar con el objetivo de ganar reconocimiento como actores políticos y entrar en diálogos de paz como los que actualmente se desarrollan. Aunque las cifras no son precisas, las AUC cuentan con cerca de 15.000 hombres armados. En el marco del proceso de desmovilización que se inició entre el gobierno de Uribe Vélez y las Autodefensas, sus máximos líderes han hablado de 20.000 hombres armados. De acuerdo con la información del Gobierno, hasta la actualidad se habrían desmovilizado 10.500 paramilitares.

también hasta el año 1990 no había presencia de los paramilitares en el Pacífico. Llegan a la zona detrás de la guerrilla y buscando ejercer control de rutas para el transporte de la droga y para la comercialización de armas. Por su carácter reactivo, buscan limpiar los territorios de la presencia de la guerrilla y expandir su control territorial. Esto implica el ejercicio del terror y las masacres sobre los que sospechan son auxiliares de la guerrilla. En la región han operado los frentes Élder Cárdenas, Pacífico, Calima y Libertadores del Sur

La presencia y expansión territorial del paramilitarismo ha ido acompañada de la extensión de los cultivos de palma africana, fuertes intereses económicos están detrás del vaciamiento de los territorios de comunidades negras. Así, la Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, denunció abiertamente que: “En el Chocó hay una disputa territorial entre grupos insurgentes y grandes capitales legales e ilegales. Unos y otros quieren obligar a la población a tomar partido en la confrontación armada, niegan la vida de quienes les contradicen, y destruyen la cultura y la convivencia tradicional de las comunidades. Es una disputa por negocios como un posible puerto de aguas profundas en el Golfo de Tribugá y cultivos ilícitos, o por corredores geoestratégicos para megaproyectos transnacionales y el comercio clandestino de narcóticos y de armas” (Osorio, 2003: 129). Oslender (2004b) ha llamado a este fenómeno las nuevas guerras económicas.

Se puede afirmar, que en la actualidad, el Pacífico es el epicentro de expansión de la guerra colombiana. Este hecho lo ha convertido en un territorio de muerte ya que en medio de la guerra los actores armados instrumentalizan el terror y la muerte, que adquieren la forma de la masacre, para vaciar los territorios⁶⁷. Con la masacre se busca afectar las redes de apoyo del enemigo, acabar con los informantes, atemorizar a los familiares de los combatientes y amedrentar a la población para controlarla bajo un clima de terror⁶⁸. El vaciamiento de los territorios es una estrategia de los paramilitares que ha sido concomitante con el proceso de titulación de las tierras de comunidades negras. En efecto, en el bajo Atrato, uno de los ríos más importantes de la región, en el año 1997, luego de que el Instituto Colombiano

⁶⁷ Con base en un análisis del caso colombiano y apoyándose en Veronique Nahoum-Grappe, etnóloga francesa que estudió en detalle las recientes masacres cometidas por los serbios en la antigua Yugoslavia, Blair define la masacre “como el teatro de la crueldad en el que el enemigo debe no solamente morir, sino que debe hacerlo con suplicio”. La describe de la siguiente manera: “Dentro de la dinámica de la masacre y para que las pasiones puedan desplegarse libremente, hay necesidad de lugares cerrados, a veces geográficamente y si no es así, los victimarios se encargan de tender el cerco. Una vez circunscrito el teatro de la violencia, las víctimas son sometidas a todas las vejaciones. Un segundo elemento que aparece como central en el desarrollo de la masacre: el tiempo. Aquella tiene necesidad de éste para explorar todos los rincones y escondrijos. La masacre-otra vez diferente del combate o la persecución-no tiene futuro inmediato, sino únicamente la duración del presente. Sería más fácil matar rápidamente a la víctima y abandonarse a la ebriedad de la destrucción. Sin embargo, no sucede así, pues, como la tortura, la masacre quiere frenar el tiempo, prolongar la agonía, diversificar la violencia. Una muerte rápida pondría fin a la masacre, de ahí la necesidad de inventar siempre nuevas atrocidades: violaciones, robos, suplicios. Con éstos, el tiempo de la masacre se prolonga; es el exceso regocijándose. Después del ataque por sorpresa, sus autores no tienen prisa; conscientes de su superioridad, hacen pausas, interrumpen la acción, reposan entre una y otra muerte; a veces, mientras la ejecutan, sus autores comen o beben. Todos los medios para prolongar la efusión de sangre son permitidos. Hay deleite en la angustia de la víctima. A la variedad de los ritmos y los lugares, se suma la diversidad de los actos de violencia. Todo está permitido. En este contexto se explican los excesos: mutilar los cuerpos, vaciar completamente el cargador aunque se sepa que la víctima ya está muerta (...) el asesino trabaja a <<mano>> y de cerca. Él quiere ver el cuerpo que sangra y los ojos llenos de miedo. La masacre es una orgía sangrante”. (Blair, 2004: 62-63).

⁶⁸ Blair define el terror como el grado máximo del miedo. “Primero aparece la atmósfera difusa del temor, frente a una amenaza intangible; después está el pánico agudo en el lugar donde la violencia afecta directamente; está luego el horror, cuando las personas, sorprendidas por la violencia, quedan estupefactas en el momento en que ésta irrumpe. A diferencia del pánico, el horror bloquea el instinto de fuga. Después está el pavor, que se toma su tiempo y va minando los nervios lentamente. El pavor se acerca a los hombres con pasos sigilosos, cuando el tipo de violencia está más allá del límite de lo concebible, cuando los cuerpos de los muertos han sido mutilados y han quedado irreconocibles. Y, finalmente, está el terror, ese grado máximo del miedo, cuando lo desconocido irrumpe de forma repentina. El terror se diferencia de todos los otros efectos de violencia, en primer lugar por su manera bien calculada de provocar miedo. El terror deja a los hombres sin habla, les hace gritar o retornar a los gemidos de la criatura.” (Blair, 2004: 64). Para un análisis del uso del terror en el conflicto colombiano ver Pécaut (1999, 2002).

de la Reforma Agraria (INCORA) entrega el primer título colectivo, las AUC desplazan a la población. Posteriormente, durante los días 17, 18 y 31 de diciembre de 1997, 200 miembros de las Autodefensas asesinan a 14 campesinos en las poblaciones aledañas a los ríos Jiguamiandó y Arrastradero (Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Observatorio, 2003: 54-55). Igualmente, el 23 de mayo de 2001 las comunidades del río Baudó reciben el título de propiedad y el 4 de junio son desplazadas por los paramilitares.

A finales de 2001 se anuncian las primeras masacres en el río Naya, en el sur del Pacífico colombiano. En noviembre de ese año, los paramilitares informan que el fin de sus acciones es “tener control de la zona y limpiarla de colaboradores de la guerrilla”. El Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) a través de diversos medios de comunicación y mediante Internet denuncian la inminencia de la masacre por parte de los paramilitares en ese río. El PCN hace circular en la red la siguiente denuncia:

Urgente, Urgente, Urgente. Comenzó incursión paramilitar en el Pacífico. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llevan más de un mes anunciando una masacre navideña a lo largo de los ríos Naya, Cajambre y Raposo, del Pacífico colombiano. Hemos sido informados que hoy, el 21 de diciembre de 2001, que hay presencia de 150 paramilitares en el corregimiento de Puerto Merizalde, Río Naya. Este hecho empeora la situación de las comunidades de los ríos Naya, Yurumanguí y Cajambre amenazadas por una incursión paramilitar. Llaman a los funcionarios de gobierno, embajadas, organizaciones de DDHH, a quien se les ocurra para frenar la barbarie que se viene. (www.ainfos.ca).

Las denuncias de las comunidades negras de poco sirvieron. Entre el 10 y el 13 de abril de 2002, en una orgía de sangre y muerte, el Bloque Farallones de las AUC masacra a 45 personas en el Alto y Bajo Naya. La mayoría de las víctimas son degolladas con machetes y motosierras, más de 3.000 personas son desplazadas. (Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Observatorio, 2003: 54-55). Antes, el 11 de mayo de 2000, 80 miembros de la Autodefensas pertenecientes al Bloque Pacífico habían asesinado a 13 campesinos y habían desaparecido a ocho más en el río Dagua, zona rural de Buenaventura, el principal puerto marítimo sobre el Pacífico. (Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Observatorio, 2003: 58).

A pocos días de la masacre del río Naya y a pesar de nuevas denuncias de las comunidades y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a finales de abril de 2002, los paramilitares incursionan en un pueblo de pescadores llamado El Firme, en la desembocadura del río Yurumanguí, y asesinan y descuartizan con hacha a siete personas acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla, cerca de mil personas son desplazadas.

Las masacres se repiten y la gente negra queda en medio del fuego cruzado. Por ejemplo, en la lucha por el control territorial del Urabá chocoano y del Bajo y Medio Atrato, las FARC pierden el control de Vigía del Fuerte y Bellavista. Tratando de recuperar el dominio sobre esta zona, el 1º de mayo de 2002 inician una ofensiva militar que se extiende durante varios días. En Bellavista, la población civil se refugia en la Iglesia para protegerse de los enfrentamientos. Los paramilitares se confunden con la población y entran en la Iglesia. El 2 de mayo, las FARC lanzan un cilindro de gas sobre el centro religioso donde se refugiaban cerca de 300 personas: 119 muertos y 98 heridos. Este es uno de los crímenes más graves cometidos durante toda la historia del conflicto armado colombiano.

Otro de los efectos desastrosos de la guerra que los diferentes actores armados libran por el control territorial del Pacífico es el desplazamiento forzado de la gente negra. Las cifras sobre desplazamiento en Colombia tienen una variación significativa de acuerdo con la institución que recoge la información y con el concepto que se utilice de desplazado. Así, de acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), entidad privada que lleva registros sobre el desplazamiento, en Colombia habrían sido desplazadas 3.333.041 personas entre 1985 y el 2004 (el desastre humanitario más grande del planeta).

La Red de Solidaridad Social (RSS) informa que de los 1.100 municipios que tiene Colombia, 480 fueron afectados por el desplazamiento en el año 2000, 819 en el 2001 y 887 en el 2002 (PNUD, 2003: 123). En los años 2003 y 2004 el número de municipios afectados al parecer descendió. Así, de acuerdo con la base de datos sobre desplazamiento de CODHES, 663 municipios habrían sido afectados en el primero de estos años y 785 en el segundo. Por lo tanto, el desplazamiento afecta a casi todo el país y los desplazados constituyen el grupo más numeroso de las víctimas del conflicto.

Según CODHES, entre el 2000 y el 2002, años de mayor desplazamiento, huían de la guerra 1.071.853 personas. Durante ese periodo, la RSS estima que el 18,16% era de afrocolombianos que provenían de los departamentos de Chocó, Sucre, Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda (RSS, 2001: 15-16.). Sin embargo, otra fuente, El Sistema de Información sobre Desplazados por la Violencia (RUT), de la Conferencia Episcopal de Colombia, calcula que en el periodo 2000-2001 el 43% de los desplazados pertenecía a este grupo étnico. Pese a las dificultades en la cuantificación y a las diferencias en las cifras, estos datos evidencian el drama del desplazamiento que está sufriendo la población afrocolombiana y en especial la gente negra del Pacífico colombiano. Esta región ha padecido varios de los desplazamientos forzados de mayores proporciones del país como los de Bajo y Medio Atrato, Buenaventura y río Baudó.

En el año 2002 fueron declaradas en crítica situación humanitaria las siguientes zonas de poblamiento afrocolombiano: Urabá Antioqueño y Chocoano, Carmen del Darién y Riosucio en el Chocó, Vigía del Fuerte, Murindó, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y Uramita en Antioquia (DNP, 2002: 3).

Como se aprecia en el cuadro 1, entre los años 1999 y 2004 en la práctica todo el territorio de la Costa Pacífica había sido afectado por el desplazamiento⁶⁹. Durante el periodo, 97.672 personas, el 10% de la población, huían de la guerra. De un total de 46 municipios, 41 han tenido desplazados. Esto evidencia la magnitud del impacto que está teniendo la guerra en esta región de Colombia ya que en la práctica de todos los territorios de comunidades negras ha salido gente expulsada.

⁶⁹ Elaboramos el cuadro a partir de la base de datos que CODHES ha construido sobre el desplazamiento en Colombia. Es necesario anotar que pese a los grandes esfuerzos de esta institución por tener información lo más precisa posible sobre el número de desplazados por el conflicto armado, para el caso de la Costa Pacífica los datos son aproximados. Así, la información que capta CODHES corresponde al número de personas que llegan a la cabecera de cada uno de los municipios. Cuando hay masacres, enfrentamientos entre los actores armados, amenazas y exigencias de abandonar los territorios, la población huye en un primer momento a la cabecera municipal. Sin embargo, no todos se comportan de la misma manera. Algunos tratan de ir más lejos para sentirse más seguros, se desplazan, entonces, a las grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. En esta decisión es muy importante contar con redes de apoyos de familiares o de amigos que residen en estas ciudades, que están fuera de la región Pacífica. También para la elaboración del cuadro incluimos a todos los municipios del departamento del Chocó como pertenecientes a la región Pacífica por lo que en ellos aproximadamente el 97% de la población es afrocolombiana. A pesar del subregistro, lo que evidencia la información es que el conflicto que se ha tomado a la Costa Pacífica ha tenido un impacto de considerables proporciones en la gente negra y en sus territorios.

Cuadro nº 1
Población desplazada en el Paífico colombiano 1999-2004

MPIO/DEPTOS	AÑO						TOTAL
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
DEPTO DEL CHOCÓ							
Acandí	460	0	350	0	0	5	815
Alto Baudó	0	0	0	0	91	140	231
Atrato	210	0	20	8	0	0	238
Bagadó	78	0	25	0	0	31	134
Bahía Solano	4.500	560	135	25	0	0	5.220
Bajo Baudó	0	0	0	0	0	13	13
Belén de Bajirá	0	0	0	0	0	38	38
Bojayá	154	41	0	0	399	245	839
San Pablo	162	0	0	0	0	0	162
Carmen del Darién	0	0	0	360	0	17	377
Certeguí	0	0	0	0	0	0	0
Condoto	0	0	30	404	401	458	1.293
El Carmen	730	70	293	88	5	513	1.699
Istrmina	0	600	266	45	0	1.040	1.951
Juradó	207	60	0	0	0	0	267
Litoral del San Juan	0	0	0	0	0	0	0
Lloró	0	0	34	981	829	1	1.845
Medio Atrato	0	0	0	0	0	432	432
Medio Baudó	0	0	0	0	0	0	0
Medio San Juan	0	0	0	0	0	520	520
Nóvita	0	0	25	0	0	0	25
Nuquí	0	227	48	20	0	0	295
Quibdó	2.490	7.054	5.390	12.201	2.419	1.494	31.048
Río Iró	0	0	0	0	0	0	0
Río Quito	0	0	0	418	0	0	418
Riosucio	480	92	435	382	548	28	1.965
San José del Palmar	0	0	0	64	30	226	320
Sipí	0	0	0	0	0	0	0
Tadó	96	47	30	90	450	70	783
Unguía	312	72	255	0	0	19	658
Unión Panamericana	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALCHOCÓ	9.879	8.823	7.336	15.086	5.172	5.290	51.586
DEPTO DEL VALLE							
Buenaventura	1.829	8.606	4.023	818	5.863	4.632	25.771
DEPTO DEL CAUCA							
Guapi	0	0	12	1.440	41	85	1.578
López de Micay	0	0	561	0	726	21	1.308
Timbiquí	0	0	70	152	0	0	222
SUBTOTAL CAUCA	0	0	643	1.592	767	106	3.108
DEPTO DE NARIÑO							
Barbacoas	185	0	150	326	788	719	2.168
El Charco	67	0	0	0	0	855	922
Francisco Pizarro	0	0	0	0	0	93	93
Maguí	0	0	0	0	467	50	517
Mosquera	0	0	28	139	90	0	257
Olaya Herrera	50	0	0	0	16	8	74
Ricaurte	85	170	182	716	125	163	1.441
Roberto Payán	0	0	0	0	0	21	21
Santa Bárbara	0	0	4.250	0	0	40	4.290
Timbiquí	0	0	70	152	0	0	222
Tumaco	405	1.658	1.032	1.144	1.318	1.645	7.202
SUBTOTAL NARIÑO	792	1.828	5.712	2.477	2.804	3.594	17.207
TOTAL	12.500	19.257	17.714	19.973	14.606	13.622	97.672

Fuente:Procesamiento propio a partir de la base de datos de CODHES.

Los municipios más afectados, a los que ha llegado el mayor número de desplazados, son los principales centros poblados de la región: Quibdó, Buenaventura y Tumaco que habrían recibido 31.046, 27.771 y 17.207 desplazados, respectivamente. Entre los años 2000 y 2002 Buenaventura recibe 13.447 personas que huyen de la guerra. De acuerdo con la base de datos

del Instituto de Estudios Ambientales (IDEAM) y de la RSS, durante esos años Buenaventura era el municipio más expulsor de desplazados del país, después de Carmen de Bolívar (Urrea, 2003: 9). Durante el periodo analizado, 1999-2004, esta ciudad habría recibido la increíble suma de 27.771 personas desplazadas (cuadro 1).

Lo anterior es resultado de la encarnizada lucha que, desde comienzos de 2000, libran la guerrilla y los paramilitares por el control de Buenaventura, “La capital regional del Pacífico”, lo que está asociado con el negocio de las drogas. En efecto, esta ciudad, uno de los municipios de mayor extensión territorial de Colombia, por sus características geoestratégicas, caudalosos ríos, amplia bahía y principal puerto sobre el Pacífico, se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de la droga que es transportada camuflada en botes por sus 20 solitarios esteros que permiten evadir los controles policiales.

Las principales ciudades, externas al Pacífico, que reciben la población que huye de los territorios de comunidades negras son Cali y Bogotá. Así, todos los registros fragmentarios que se poseen sobre el desplazamiento forzado hacia la ciudad de Cali, el epicentro del Sur-occidente colombiano, muestran que en el periodo 1995-2003 la población negra ha venido teniendo cada vez más importancia en el conjunto de los migrantes que debido a la guerra llegan a Cali, con una concentración particular de la Costa Pacífica, pero sobre todo desde 1999 (Urrea, 2003: 9).

Todos los actores armados involucrados en la guerra en el Pacífico, guerrillas, paramilitares y Ejército, son responsables del desplazamiento de la gente negra. Así, un estudio realizado entre diciembre de 1999 y febrero de 2000 en localidades de Bogotá por CODHES y AFRODES mostró, en lo relativo a los responsables del desplazamiento, que el 55,26% había sido desplazado por los paramilitares, el 19,3% por la insurgencia, el 14,0% por desconocidos, el 3,51% por las Fuerzas Militares y el 9,0% por otros (Rosero, 2001: 1). El desplazamiento de la gente negra ha sido calificado por los dirigentes del PCN como “la mayor agresión que sufren los afrodescendientes en los últimos 150 años.” (Rosero, 2001: 1).

Por lo tanto, la información sobre desplazamiento y muerte evidencia que todos los territorios de comunidades negras ya titulados o en proceso de titulación están siendo vaciados de sus pobladores. Esto constituye una estrategia de los actores armados, paramilitares y guerrillas, que mediante la instrumentalización del terror controlan estos lugares, convertidos hoy en territorios de muerte, y en los que se impide mediante el uso ilegítimo de la fuerza el ejercicio de la territorialidad de las comunidades negras, el principal logro del movimiento de negritudes en Colombia.

1.2 La Estrategia de Resistencia Territorial de las Comunidades Negras Ante la Guerra

1.2.1 Los territorios de paz y alegría

Ante la des-territorialización, terror y muerte que está produciendo la guerra en el Pacífico colombiano, las comunidades negras y el movimiento social han desarrollado varias estrategias y repertorios de acción que buscan defender la vida y el territorio. Estas estrategias se basan en el conocimiento centenario que la gente negra tiene de sus ríos, en las formas de organización social y comunitaria y en el rechazo al conflicto por parte de comunidades pacíficas que históricamente han estado en la frontera tanto del Estado-nación como del conflicto interno que durante más de cincuenta años ha padecido Colombia.

En efecto, luego de que se produce la masacre de El Firme, en el Yurumanguí, y a pesar del desplazamiento, las comunidades negras de diferentes ríos, con el apoyo del PCN y la presencia de delegados internacionales de ONG defensoras de los derechos humanos, hacen una declaración de no a la guerra y exigen a los actores armados abandonar los territorios y que no los conviertan en el escenario del conflicto: “(...) Nosotros hemos sido claros y somos claros en señalar que no aceptamos que nos representen actores armados, es decir, no reconocemos la autoridad en nuestro territorio de los actores armados. Y esto es difícil porque ellos tienen armas, ellos no te están preguntando, ellos o haces lo que dicen o te matan porque ellos hablan con las armas, con las balas.” (Entrevista con José Nieves, miembro del Consejo Comunitario del río Mayorquín, río Mayorquín, julio 3 de 2004.)⁷⁰. Las comunidades negras han seguido

⁷⁰ A pesar de la historia de paz de las comunidades del Pacífico, ante la agresión de los actores armados y frente a un Estado que no está en capacidad de garantizar la vida de la población, miembros de las Comunidades Negras proponen armarse para llevar a cabo una autodefensa comunitaria de los territorios negros. Un fenómeno similar a lo que originó la guerrilla indigenista Quintín Lame. No obstante, esta

pronunciándose en contra de la guerra y siguen exigiendo el respeto de los territorios y de los consejos comunitarios.

En esta asamblea, el río es declarado “territorio de paz y alegría”. Esta estrategia consiste en que las comunidades definen que sus territorios son de paz y que, por lo tanto, deben ser excluidos de la guerra y que no debe haber presencia en ellos de los actores armados, ni siquiera del Ejército nacional. Se acepta solamente que estén instituciones internacionales defensoras de los derechos humanos.

Los territorios de paz y alegría son, por lo tanto, espacios de resistencia de las Comunidades Negras para oponerse a la des-territorialización que la guerra está produciendo en el Pacífico colombiano. El ejemplo se ha ido multiplicando, aunque débilmente. Así, las comunidades de la cuenca del Bajo Atrato, desplazadas de sus territorios, se asentaron en Pavarandó, municipio de Mutatá, Antioquia, y se declararon como “Comunidades de Paz San Francisco de Asís”. Esta estrategia cuenta con el apoyo de la Iglesia y de ONG de carácter nacional e internacional que exigen que la población civil sea excluida del conflicto.

Sin embargo, como toda estrategia que las comunidades intentan llevar a cabo en un territorio dominado por la guerra, la propuesta de la construcción de los territorios de paz y alegría ha enfrentado serios obstáculos. El primero de ellos es la negociación que las comunidades deben llevar a cabo con los actores armados. Como se encuentran en medio de la guerra, si alguien establece diálogo con uno de los bandos en conflicto es calificado como colaborador por el otro bando. Así, por ejemplo, en el departamento del Chocó entre 1996 y 2002, 116 integrantes de las comunidades de paz han sido asesinados y 19 desaparecidos (PNUD, 2003: 130).

En las estrategias de resistencia contra los actores armados comunidades como las del Consejo Comunitario del Río Baudó han redactado “reglamentos de convivencia”. Estos reglamentos se pintan en las casas de donde han sido desplazados y estipulan reglas como no dar información a los actores armados, no relacionarse con ellos. Incluso, se prohíbe a las mujeres establecer relaciones con guerrilleros o paramilitares (Oslender, 2004b:71).

1.2.2 Desplazamiento colectivo, no individual

Como hemos mostrado, la gente negra del Pacífico colombiano está siendo desplazada de sus territorios como resultado de la lucha entre guerrillas y paramilitares por el control territorial. Resultado de esta experiencia traumática, la gente ha comprendido que si huye individualmente se hace más vulnerable. El abandono individual de los territorios origina un “desplazamiento por goteo” en el que las personas son absorbidas anónimamente en la gran ciudad en la que terminan engrosando los cinturones de miseria y se invisibilizan entre los nuevos pobladores urbanos. Cuando son recibidas en hogares, regularmente pobres, al incrementarse la relación de dependencia terminan profundizando las condiciones de pobreza de esos hogares.

Dado que con el desplazamiento individual la gente se hace más vulnerables, las comunidades negras han decidido como estrategia de que en caso de ser desplazadas deben realizar una *evacuación colectiva del territorio*. El desplazamiento en grupo genera un hecho social que obliga a las entidades oficiales a prestar atención inmediata y le permite a las comunidades negociar en mejores condiciones con el Estado. Y, sobre todo, el desplazamiento colectivo abre la esperanza del retorno también colectivo:

Preparar a la gente, que la gente no salga del río. En la peor situación, que la gente se desplace internamente. En caso de que la gente vea que las condiciones no están bien en el río para estar, desplazarnos masivamente, un desplazamiento organizado colectivo. La gente hoy está preparada que si nosotros decimos no resistimos más, entonces, vámonos, pero vámonos todos. Las personas que salen solas les va mal, les va muy mal. Entonces, en caso de que nos vamos a desplazar, ¡muchachos! vamos a desplazarnos pero todos. Todo la gente hoy está preparada, hasta se le ha dicho a la gente mantengan debajo de su almohada su cédula, su registro civil, su carné de salud y sus cositas, en caso de que les toque desplazarse, pues saben que por lo menos la identificación la tienen. (Dalia Mina, miembro del Consejo Comunitario del río Yurumanguí, río Yurumanguí, julio 8 de 2004).

propuesta, resultado de la desesperación, fue rechazada por las comunidades porque ella implicaba participar, como un actor armado más, en el conflicto.

1.2.3 El “cimarronismo moderno”

Las comunidades negras han desarrollado una estrategia de resistencia frente a la guerra que busca defender la vida, pero sin *abandonar el territorio*. A esta estrategia le hemos dado el nombre de “cimarronismo moderno”, porque parte de lo que hacían los cimarrones durante la esclavitud, pero se aplica a las condiciones de un conflicto que comporta algunos de los rasgos que caracterizarían las “nuevas guerras”.

El “cimarronismo moderno” surge del impacto que las masacres y el desplazamiento han producido en la gente negra que se ha visto obligada a salir de los territorios. Esto ha generado la conciencia de que abandonar los territorios es hacerse más vulnerable porque implica la pérdida de derechos económicos, sociales y culturales y profundización de la pobreza ya que en los centros urbanos el desplazado regularmente es acogido por un hogar pobre que al incrementar la relación de dependencia incrementa la pobreza.

De manera similar a los cimarrones, que se escondían en la selva, en sitios desconocidos para los amos, donde fundaban la sociedad de hombres libres, las comunidades negras, para proteger sus vidas sin abandonar el territorio, se internan en lugares inaccesibles, solamente conocidos por ellas. Se refugian en los afluentes, en los caños y en las quebradas donde permanecen por semanas y cuando la situación deja de ser crítica regresan a los lugares en que habitan regularmente. Las comunidades llaman a estos sitios *encaletados*, “donde no nos encuentra nadie”. Por lo tanto, en lugar de ir al poblado, la estrategia para enfrentar el desplazamiento consiste en ir “monte adentro”, donde tienen mayores posibilidades de mantener la cohesión grupal. De esta manera, en un nuevo contexto, para salvaguardar la vida y el territorio, se repiten las técnicas guerreras de los cimarrones.

La aplicación de estas estrategias de resistencia va acompañada con tácticas de seguridad alimentaria que garantizan la permanencia en el territorio. De esta manera, muchas comunidades han optado no sólo por sembrar sus chagras para alimentarse, sino que organizan brigadas para ir monte adentro, en los *encaletados*, y “sembrar comida” en varios lugares. Esto ha implicado recuperar semillas tradicionales, rescatar antiguos cultivos y buscar nuevas fuentes de proteínas. El caso paradigmático es el de las comunidades negras del río Yurumanguí que después de 30 años, ante el cerco alimentario a que han estado sometidas por la guerra, han vuelto a sembrar arroz usando las semillas tradicionales.

Las anteriores estrategias de resistencia de las comunidades negras contra la guerra: territorios de paz y alegría, reglamentos de convivencia, desplazamiento colectivo con retorno colectivo, “cimarronismo moderno”, entre otras, son formas localizadas que tienen éxitos relativos porque es el enfrentamiento de comunidades civiles desarmadas en contra de poderes armados muy poderosos y con un Estado débil que no puede garantizar la vida de los ciudadanos. Por esta razón, las comunidades negras, sus organizaciones y el PCN comienzan a globalizar la resistencia. Así, usan permanente Internet para denunciar los crímenes, atropellos y masacre de los actores armados, comienzan a estar presentes en organismos internacionales y en foros mundiales donde denuncian la guerra, solicitan el apoyo de la comunidad internacional, de las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y de la Iglesia para que tengan presencia en los territorios de paz y alegría.

Recientemente, en la estrategia de internacionalización de la resistencia contra la guerra, AFRODES abrió una oficina con un representante en Washington que funciona como centro de información para los senadores norteamericanos y la población norteamericana en general (Oslender, 2004b:72).

Hoy, las comunidades negras y el movimiento social de negritudes son conscientes de que la única manera de defender los territorios, cuya titulación colectiva les ha costado “sangre, sudor y lágrimas”, es mediante la *resistencia glocalizada contra la guerra*.

2. LA GUERRA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS: EL CASO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

2.1 Muerte y Desplazamiento

Como se anotó antes, como resultado del ascenso de las luchas indígenas, entre otros factores, hoy cerca de una cuarta parte del territorio colombiano está bajo la categoría de resguardos que están dotados de poderes políticos y administrativos reconocidos constitucionalmente. Sin embargo, de manera similar a lo acontecido con las tierras de comunidades negras, estos territorios y sus comunidades enfrentan un nuevo desafío: la presencia de actores armados, guerrilla y paramilitares, que se han convertido en los modernos factores de ocupación que producen muerte y desplazamiento.

Los territorios indígenas, por sus características geofísicas, de aislamiento geográfico, poblamiento disperso y en el caso de los Andes, áreas montañosas e inhóspitas, se han convertido en espacios propicios para la resistencia armada y, por lo tanto, en escenario de la guerra. Sumado a lo anterior, la estrategia militar y política de los grupos armados colombianos, en particular la de las FARC, como ya comentamos, ante la incapacidad de derrotar al Estado se ha orientado al control de territorios para crear poderes de facto e ir construyendo un embrión de Estado. El fortalecimiento militar de este actor armado durante los años noventa, cuando pasa de ser una guerrilla campesina mal equipada, que trashumaba por los campos, a un ejército de cerca de 20.000 hombres, ha estado acompañado de un acelerado proceso de expansión y control territorial, como tuvimos oportunidad de ver. Esto produjo que para finales de los años noventa existiera presencia de la insurgencia en casi todos los territorios indígenas.

Ya para el año 2001, en todas las zonas colombianas de resguardos viejos y nuevos, Amazonia norte, Amazonia sur, Pie de Monte Amazónico, Sierra Caribe, Centro andino, Oriente andino, Occidente andino sur y norte, Costa Pacífica y Orinoquia, tenían presencia de la insurgencia armada. De tal forma que si se superpone el mapa de los territorios indígenas con los de la presencia de las FARC y el ELN hay una extraordinaria coincidencia.

Otro factor que ha sido decisivo para la presencia creciente de los actores armados y de la guerra en los territorios de resguardos es que las guerrillas, en especial las FARC, encontraron en un impuesto colocado a los cultivadores y compradores de coca una fuente inagotable de recursos que les ha permitido su fortalecimiento militar. Y precisamente la coca es una planta cultivada y consumida por los indígenas con fines terapéuticos, míticos y rituales⁷¹. También, buena parte de las características de los resguardos (aislamiento geográfico, tierras selváticas de escasa presencia del Estado) han sido propicias para el desarrollo de los cultivos ilícitos.

La guerra en Colombia ha producido muerte y desplazamiento. Como vimos antes, muchos de los homicidios que se generan por el conflicto tienen la forma de masacres. De acuerdo con una de las investigaciones más serias sobre la violencia en Colombia, entre 1997 y el 2002 se habían producido 930 masacres que habían arrojado 5.235 víctimas. Durante el primer semestre del 2003 se habían perpetrado 125 mientras que en el mismo lapso del 2002 se habían cometido 153 (PNUD, 2003: 121). Muchas de estas masacres han sido perpetradas en los territorios de resguardos en los que se libra, como en el caso del Pacífico colombiano, una lucha por el control territorial entre las FARC y las AUC.

Los indígenas asentados en los resguardos constituyen uno de los grupos más vulnerables. Por ejemplo, la Fundación HEMERA estima que entre los años 2001 y 2002 habían sido asesinados 177 indígenas, en su mayoría líderes, gobernadores y miembros de cabildos. En el año 2002 10.000 indios habrían sido desplazados de sus territorios y 15.000 habrían sido afectados por las incursiones de los actores armados. De acuerdo con la RSS, el 4% de la población desplazada entre enero de 2000 y junio de 2003 pertenecía a los grupos indígenas.

La misma Fundación HEMERA registró un total de 215 violaciones a los derechos humanos y al DIH cometidos contra los indígenas. De esos casos, 72 se cometieron en el 2001 y 142 en el 2002 lo que evidencia un incremento interanual del 97%. Esas violaciones estuvieron muy concentradas ya que el 80% se cometieron contra miembros de cinco etnias: páez (27%), emberá (18%), emberá katío (14%), kankuano (11%) y emberá chamí (8%). Los responsables de estos 215 casos se distribuyen así: 42% paramilitares, 21% FARC, 2% ELN. Los cuerpos armados del Estado 9%. Se desconoce los responsables del 25% de los casos (PNUD, 2003: 132).

⁷¹ Desde el punto de la relación mítica y ritual con diversas plantas, en Colombia se diferencian cinco grupos complejos: El de la coca y el tabaco, el de la coca y el ambil, el del yagé, el de Yuruparí y el de los pueblos del yopó.

Las características propicias de los territorios indígenas para que se conviertan en escenarios de la guerra y en objeto de disputa territorial, descritas antes, son compartidas por los resguardos del Cauca, al Sur de Colombia. A esto se suma la posición geográfica estratégica de este departamento lo que ha determinado que desde los tiempos coloniales haya sido lugar de tránsito del Norte hacia el Sur y del Sur al Norte y conexión con el Oriente de lo que hoy es el país Colombiano.

En esta región operan el Bloque Sur de las FARC que recientemente ha buscado asegurar el corredor que va del Amazonas a la Costa Pacífica, una ruta crítica del narcotráfico, como vimos. También tienen presencia en esta región el ELN y las AUC. Por lo tanto, en los resguardos indígenas del Cauca también se libra la lucha por el control de territorios por parte de los actores armados lo que ha producido igualmente muerte y desplazamiento y un desafío a la territorialidad indígena.

Por ejemplo, del total de desplazados entre el 2000 y el 2002, estimados por la RSS en 964.904, 30.844 se presentaron en el departamento del Cauca (PNUD, 2003: 121). La misma Red de Solidaridad estima que de los 9.190 indígenas desplazados en el año 2001 (Arango y Sánchez, 2002: 244), 1.537 lo fueron en el departamento del Valle del Cauca. No obstante, parte de esta población debe ser indígena caucana donde existe una de las mayores concentraciones de población india de Colombia.

Arango y Sánchez (2002: 247) reportan que en el 2001, en la región del Alto Naya, municipio de Buenos Aires, Cauca, los nasas fueron objeto de desplazamiento hacia Santander de Quilichao luego de la masacre del Naya cometida por paramilitares. El mismo desplazamiento sufrieron los indígenas de la comunidad de Pueblo Nuevo que se ubicaron temporalmente en el resguardo de Tóez. Igualmente, se presentó desplazamiento del corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío. Y en el departamento del Valle del Cauca se registra que en los municipios de Pradera y Florida indígenas nasas fueron desplazados.

2.2 Las Estrategias Indígena Contra la Guerra

Ahora, desde la desmovilizada guerrilla indigenista Quintín Lame, los cabildos⁷² del departamento Cauca se han convertido en un actor que se opone a la presencia armada en sus territorios. Para las autoridades indígenas esto constituye un desafío a su territorialidad y han exigido a los actores armados no convertir sus territorios en escenario permanente de guerra. Han estructurado un discurso que se opone a la guerra al considerarla opuesta a sus intereses.

La política de las autoridades indígenas frente a los actores armados se ha basado en tres principios: (1) el no-reclutamiento de indígenas para las filas de los actores armados; (2) ningún grupo armado puede entrometerse en la solución de los problemas internos de los pueblos indígenas y; (3) no a la presencia de los actores armados en los territorios indígenas. El primero de estos principios ha sido defendido frente al Estado central cuando los pueblos indígenas se han negado a prestar el servicio militar, que de acuerdo con las leyes de la República es obligatorio. La defensa de esta política de “soberanía territorial” ha generado enfrentamientos entre pueblos indígenas y guerrilla en los que han sido asesinados varios de sus líderes.

Los indígenas comienzan a organizarse para enfrentar los nuevos factores de ocupación de tal forma que se estructura un movimiento de resistencia civil en contra de la guerra y de la presencia de los grupos armados en los territorios de resguardo. Por ejemplo, los paeces han conformado comandos antisequestro para defender a sus autoridades tradicionales de las acciones de la guerrilla y de los paramilitares.

El Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia ha sido uno de los sectores indígenas más críticos de la presencia de los actores armados en los territorios indios, de hecho, varios de sus dirigentes han sido asesinados tanto por la guerrilla como por los paramilitares. Así, en la Quinta Asamblea Nacional Extraordinaria realizada en el resguardo de Guambía en el año 2001 publicaron un manifiesto en contra de la guerra en el cual insisten que ese conflicto no les pertenece: El manifiesto, entre otros apartes, dice:

POSICIÓN FRENTE AL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA

Ni la guerra de “independencia” (léase: movimiento político de separación de España), ni las posteriores guerras civiles del siglo XIX, ni las violencias del

⁷² Los cabildos son las formas de gobierno propio en los territorios indígenas.

siglo XX y las que aún continuamos viviendo al comenzar el siglo XXI nos han pertenecido, ni nos pertenecen. Hemos participado voluntariamente en algunos casos y en la mayoría de las veces obligados y en todo ello sólo hemos recibido muerte, engaños, desplazamiento y destrucción física y cultural. Por eso hoy nuestra lucha es independiente de esas confrontaciones, porque ni nos resuelven nada ni nos representan. La nuestra es una lucha por la vida, por la existencia, por defender lo nuestro, principalmente con el arma del pensamiento propio y sin dejar de apoyar la lucha del pueblo colombiano por sus derechos políticos (...) el conflicto armado en que se debate hoy Colombia, se ha intensificado en los últimos años, es decir, profundizándose y polarizándose a tal grado que ha entrado en proceso acelerado de deterioro y degradación. El proceso de generalización y profundización del conflicto armado se ha convertido en una guerra de dominio territorial por parte de los diferentes actores, produciendo la mayor parte de las víctimas en la población civil no combatiente, de la cual no escapamos los pueblos indios, por medio de masacres, desplazamiento forzados, destrucción de poblados, violación de nuestro Derecho Mayor, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En este contexto de guerra emergemos las comunidades indígenas que estamos reclamando a los actores del conflicto el respeto a nuestros proyectos de vida, al territorio, autoridades, autonomía y cultura, que no se nos involucre en el conflicto, como principios fundamentales de resistencia de nuestros pueblos al aniquilamiento. Estas expresiones de autonomía de los pueblos indios, deben ser consideradas como experiencia de existencia, no sólo justa, sino válidas y entendidas como mecanismo de defensa no violenta ante cualquier forma de agresión que provenga ya sea del Estado Colombiano, del capital, de los actores armados y de la sociedad mayoritaria. En los últimos tiempos se ha querido dar especial trascendencia a la resistencia desplegada por los pueblos indios frente a los actores armados, particularmente en el Cauca, donde se han movilizad algunas comunidades indígenas contra las tomas de poblaciones por parte de la guerrilla(...)reiteramos que los pueblos indios hemos sido y seguimos siendo objeto de todo tipo de agresiones violentas y no violentas. En consecuencia, hemos sido y seguimos siendo escenarios de resistencia política y cultural. (AICO, 2003a:9-14).

En rigor, desde finales de la década de los noventa, cuando los paramilitares incursionan en los territorios de indios y el conflicto con la guerrilla se agudiza, los indígenas inician una activa resistencia contra la guerra. Esta resistencia tiene varias características sobresalientes. En primer lugar, se denomina así porque se opone a los efectos nocivos que la guerra está generando en los resguardos: muerte, des-territorialización y desconocimiento de las autoridades tradicionales. En segundo lugar, no es una reacción meramente defensiva porque se integra al proyecto político que el movimiento indígena viene desarrollando desde hace varias décadas. Por ello, los indios caucanos consideran que su rechazo a la guerra y su oposición a los diferentes actores armados hace parte de su larga lucha por la defensa del territorio, de la cultura y de las autoridades propias. En tercer lugar, es una resistencia desarmada y pacífica, es decir, que no apela a las armas. Por lo tanto, puede ser catalogada como un tipo de resistencia étnica y civil en contra de la guerra y por la paz.

El movimiento indígena caucano ha puesto en práctica una gran variedad de acciones colectivas pacíficas y repertorios de acción que se oponen a la guerra. Éstos contemplan la realización de grandes asambleas comunitarias, declaraciones públicas de rechazo al conflicto, diálogo directo con los actores armados para comunicarles las decisiones tomadas por la comunidad, creación de la guardia indígena cuyas únicas "armas" son los bastones de mando, báculos que representan la autoridad tradicional, conformación de grupos anti-secuestro, formulación de manuales de convivencia en que se impide dar información a cualquiera de los actores armados o relacionarse con ellos y masivas manifestaciones en las que los indígenas expresan su rechazo a la conflagración. De manera similar a lo acontecido con las comunidades negras, los indios han comenzado a globalizar también la resistencia contra la guerra.

De estos repertorios de acción, uno de los que tiene mayor poder simbólico y que tiene una estrecha relación con el territorio, es la declaración de territorios de paz. Estos son lugares neutrales y lugares sagrados que deben ser excluidos totalmente de la guerra y donde ningún actor armado, guerrillas, paramilitares o Ejército, puede estar (Hernández, 2004). Para los indígenas esto es la continuación de una larga lucha por la defensa del territorio que se remonta

a la llegada de Colón a suelo americano. Integran en su resistencia auténticas tradiciones inventadas (Hobsbawm y Ranger, 1983) como las luchas de la Gaitana contra los españoles en el siglo XVI, las de Juan Tama por la defensa de los resguardos durante el siglo XVIII y las de Quintín Lame, el gran general de indios, a comienzos del XX.

También, masivas manifestaciones en las que los indígenas expresan su rechazo a la guerra y a la globalización neoliberal han sido muy relevantes por el impacto mediático que producen. La más importante de los últimos años ha sido el “Congreso itinerante indígena por la autonomía y la tolerancia”. En esta marcha, llevada a cabo entre el 17 y el 20 de septiembre de 2004, participaron cerca de 60.000 indígenas. Paeces, coconucos, yanacunas, guambianos, emberas, nayas; indios del Pacífico, del Macizo Central, del Puracé, de los departamentos de Risaralda, Antioquia, y Quindío; indígenas de plano, de río y de montaña, con delegaciones del Ecuador y de Bolivia, con bastones de mando como arma simbólica, y con la guardia indígena, que garantizaba una perfecta organización, “salieron antes que el sol” y desde los resguardos del Cauca se tomaron a Cali, la capital del suroccidente colombiano. Ante una orden de detener a los manifestantes dijeron: “Es más fácil devolver las aguas del Magdalena (el llamado Río de la Patria) que parar la marcha pacífica.”

El “Congreso itinerante indígena” sesionó en cuatro comisiones: los derechos humanos, el Tratado de Libre Comercio, las reformas constitucionales y los mecanismos de resistencia y autonomía territorial. En cuanto a la primera, dieron un ultimátum de seis meses al Gobierno para que entregara informes de las muertes de dirigentes indígenas en masacres registradas en todo el país. Denunciaron que en el suroccidente de Colombia habían muerto violentamente 400 nativos y que había 180 desaparecidos. El Congreso termina, entre otras, con la siguiente declaración pública:

MANDATO FINAL DE LA MARCHA INDÍGENA EL DESAFÍO QUE NOS CONVOCA

Con nosotros vienen los recuerdos y las experiencias de una larga historia de lucha y de resistencia. Echamos mano de nuestras identidades y de nuestras culturas para enfrentar las amenazas que ha traído cada época. Este camino no ha sido fácil. Desde la conquista y sin descanso, la arrogancia, el egoísmo, la ignorancia y el irrespeto, disfrazados de distintas maneras, han caído sobre nosotros con engaños y mentiras, con falsas promesas, con el poder de armas cada vez más sofisticadas y mortales (...) Cada vez que llegan a atropellarnos aseguran que es por nuestro bien. En cada época tuvimos que aprender a resistir y hacerlo de una manera diferente de acuerdo con el desafío que enfrentamos (...) Los últimos pasos que nos trajeron a este Congreso Itinerante de los Pueblos, son la etapa más reciente de esa larga historia, pero también establecen el comienzo de un nuevo camino que hemos decidido recorrer. Con las 60.000 personas que marchamos hasta Cali y por otros caminos del país, marcharon nuestros recuerdos, nuestros ancestros, los luchadores que abrieron el camino antes (...) El desafío que impone esta nueva época es grande. Tal vez el mayor que hayamos tenido que enfrentar en nuestra historia. No solamente están en riesgo nuestras culturas, nuestras comunidades, nuestros pueblos y familias. Es peor, la vida misma corre el riesgo de ser destruida por la ceguera de quienes se han equivocado y utilizan el mayor poder de la historia para convertir en mercancía todo lo que existe a través de su Proyecto de Muerte.

Frente al conflicto armado, la violación de derechos humanos y la política de seguridad democrática; diseñar y poner en marcha mecanismos populares para el logro de una salida negociada al conflicto armado; exigir verdad, justicia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado; promover mecanismos populares y autónomos de resistencia civil, paz y seguridad, que incluyan el reconocimiento de la guardia indígena como fuerza popular nacional e internacional de paz; exigir y diseñar mecanismos de resistencia civil con presión, apoyo y veeduría nacional e internacional para lograr la salida de los grupos armados de nuestros territorios y el respeto a la población civil, a nuestra autonomía y a nuestras organizaciones de manera que no se nos siga involucrando en el conflicto.

Por la vida, la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía, Seguimos caminando.
(Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN-CXAB WALA KIWE).

Dado que la resistencia indígena a la conflagración hace parte de un proyecto político y por el alto grado de organicidad que ha adquirido el movimiento indígena, éste se ha convertido en el actor más activo y organizado que existe en Colombia que se opone en la actualidad a la guerra.

CONCLUSIONES

La guerra colombiana, término que se usa recientemente para nombrar el conflicto colombiano, posee características tanto de las llamadas “viejas” como nuevas “guerras”. Es un fenómeno complejo que posee estratos de las confrontaciones que se dieron bajo el manto de la “guerra fría”, pero también de las que se están dando bajo el capitalismo global después de la caída del Muro de Berlín.

En esta “guerra olvidada”, al igual que la que libraban los Estados modernos para el establecimiento de fronteras donde ejercer soberanía, ejércitos privados de guerrillas y paramilitares han privilegiado el control territorial. La guerrilla, en especial las FARC, ante la imposibilidad de conformar un partido político, bien porque su estrategia ha privilegiado lo militar frente a lo político o porque una de las reglas de oro del juego político democrático, la existencia de la oposición, fue impedida hasta hace poco en Colombia mediante el uso de la violencia, ha jugado a la creación de un ejército. Como este ejército no ha podido derrotar militarmente al Estado, ha optado por la estrategia de crear un “embrión” de Estado por lo que el control sobre el territorio y la gente se vuelve crucial. Por su parte, los paramilitares, que surgen como una expresión de grandes ganaderos y narcotraficantes ante el avance de la guerrilla, se proponen limpiar de guerrilleros y simpatizantes los territorios dominados por las fuerzas insurgentes. De esta forma, se configura una guerra a muerte entre guerrillas y paramilitares por el control territorial.

A lo anterior se suma el hecho de que guerrillas y paramilitares se financian de recursos provenientes del tráfico de las drogas, un impacto de la globalización en la guerra colombiana. Así, el control del territorio es también una lucha por dominar las rutas del narcotráfico y los lugares donde se cultiva la coca, materia prima para la producción de la cocaína. Esto ha hecho que los objetivos políticos del conflicto se desvanezcan cada vez más y que el famoso principio clausewitziano de que la “guerra no es más que la continuación de la política por otros medios” se esté convirtiendo en la “continuación de la economía por otros medios”. Es decir, que detrás de la guerra colombiana hay grandes intereses económicos por lo que Oslender (2004b) no ha dudado en calificarla de una guerra económica, como la que se desarrolla en estos momentos en Irak.

Como si fuera una de las “nuevas guerras”, en el conflicto colombiano ha desaparecido hace rato la distinción entre combatientes y civiles y entre militares y líderes políticos. Así, los dirigentes políticos son declarados objetivo militar y el ataque a la población civil se convierte en una forma de afectar al bando enemigo. Para atacar a la población, los actores armados hacen un uso instrumental del terror, que adquiere la forma de las masacres indiscriminadas. De esta manera, los principales afectados de esta guerra no son los militares, sino la población civil que es asesinada y desplazada.

La guerra colombiana, con las anteriores características, se está desarrollando en toda su intensidad en los territorios de indios y de comunidades negras. Por lo tanto, esta guerra se ha convertido en el principal obstáculo que enfrentan indígenas y negros en los territorios étnicos recientemente delimitados, la principal conquista democrática de los movimientos que han politizado la diferencia en Colombia.

En efecto, como resultado del ascenso de las nuevas etnicidades, indígenas y negros han logrado la titulación colectiva de sus territorios ancestrales. En un hecho sin precedente en América Latina, en Colombia más de una cuarta parte de la superficie nacional está bajo la categoría de resguardos y de tierras comunidades negras, es decir, territorios dotados de poderes administrativos y políticos reconocidos constitucionalmente. Es en estos territorios, en especial en la Costa Pacífica colombiana, hacia donde se ha desplazado la guerra colombiana.

Indígenas y negros están siendo asesinados y desplazados de sus territorios por todos los actores de la conflagración: guerrillas, paramilitares y Ejército. Frente a esto, las organizaciones de indios y comunidades negras han iniciado una resistencia pacífica que pone en juego diferentes repertorios acción como la declaración de territorios de paz y alegría, el “cimarronismo moderno”, reglamentos de convivencia, desplazamiento colectivo y grandes movilizaciones de denuncia. Como es un conflicto también influenciado por las tendencias de la

globalización capitalista, los actores étnicos están desarrollando una estrategia de resistencia glocalizada frente a la guerra.

BIBLIOGRAFÍA

- ARANGO, Raúl, SÁNCHEZ, Enrique (2002): *Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del siglo XXI. Población, cultura, territorios y bases para el desarrollo regional*, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación.
- BARBARY, Olivier y URREA, Fernando (editores) (2004): *Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico*, Cali, Cidse-Univalle, Ird-Colciencias.
- BLAIR, Elsa (2004): "Barbarie y crueldad o la profundización del dolor a través del cuerpo: códigos de un nuevo lenguaje de la violencia en Colombia, L. C. Castillo (Editor): *Colombia a comienzos del nuevo milenio: octavo coloquio nacional de sociología*, Cali, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales, pp. 49-83.
- CLAUSEWITZ, Carl (1832) (2005): *De la guerra*, Madrid, La Esfera de los Libros.
- COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA (1987): *Colombia: Violencia y democracia*, Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) (2002): Documento CONPES 3182: *Programa para la reconstrucción y desarrollo sostenible del Urabá antioqueño y chochoano y bajo y medio Atrato*, Presidencia de la República de Colombia, Bogotá.
- ESCOBAR, Arturo (1997): Cultural politics and biological diversity: State, capital, and social movements in the Pacific coast of Colombia, en L. Lowe y D. Lloyd (eds.): *The Politics of Culture in the Shadow of Capital*, Durham, Duke University Press, pp. 201-226.
- FALS, Orlando, GUZMÁN, Germán y HUMAÑA, Eduardo (1962): *La violencia en Colombia*, Tomo I, Monografías Sociológicas, Bogotá, Universidad Nacional.
- HALL, Stuart (1991a): "The local and the global: Globalization and ethnicity", en A. D. King (ed.): *Culture, Globalization and the World-System*, Londres, Macmillan, pp. 19-39.
- HALL, Stuart (1991b): "Old and new identities, Old and new Ethnicities", en A. D. King(ed.): *Culture, Globalization and the World-System*, Binghamton (N.Y), Art and Art History, pp. 40-68.
- HERNÁNDEZ, Jorge (2004): "Repertorios, marcos y entramados de resistencia civil en Colombia: los premios nacionales de paz, 1999-2002", L. C. Castillo (Editor): *Colombia a comienzos del nuevo milenio: octavo coloquio nacional de sociología*, Cali, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Valle, pp.209-229.
- HOBBSBAWM, Eric y RANGER, Terence (1983): *The Invention of Tradition*, Cambridge, Cambridge University Press.
- KALDOR, Mary (2001): *Las nuevas guerras. La violencia organizada en la era global*, Barcelona, Tusquets Editores.
- OSLENDER, Ulrich (2004a): "Fleshing out the geographies of social movements: Colombia' Pacific coast black communities and the <<aquatic espace>>", Department of Geography, University of Glasgow, Glasgow, article in press for *Political Geography*.
- OSLENDER, Ulrich (2004b) "Construyendo contrapoderes a las nuevas guerras geo-económicas: Caminos hacia una globalización de la resistencia", *Revista de Humanidades Tabula Rasa*, nº 2, pp. 59-78.
- OSORIO, Luis Carlos (2003): "Conflicto en el Chocó. Talanquera nada pacífica", *Colombia: un callejón con salida. Informe de Desarrollo Humano 2003*, Bogotá, PNUD-Naciones Unidas, pp. 129-130.

- PÉCAUT Daniel, (1987): "Colombie : au-delà du point de non-retour ?", in: Problèmes d'Amérique Latine, n° 86, 4^{ème} trimestre 1987, pp. 3-22.
- PÉCAUT, Daniel (1999). "Las configuraciones del espacio, del tiempo y de la subjetividad en un contexto de terror: el ejemplo colombiano", *Colombia: democracia y paz*, Medellín, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia, Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, pp. 221-256.
- PÉCAUT, Daniel (2002): "De la violencia banalizada al terror", (Tercera Parte) de *Guerra contra la sociedad*, Bogotá, Espasa.
- PÉCAUT, Daniel (2004): "Conflictos armados, guerras civiles y política. Relación entre el conflicto colombiano y otras guerras internas contemporáneas", L. C. Castillo (Editor): *Colombia a comienzos del nuevo milenio: octavo coloquio nacional de sociología*, Cali, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Departamento de Ciencias Sociales, pp. 23-48.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO, PNUD (2003): *El conflicto: callejón con salida. Informe de Desarrollo Humano para Colombia*, Bogotá.
- PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, OBSERVATORIO (2003): *Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH*, Bogotá, Presidencia de la República de Colombia.
- RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2001): *Atención a la población desplazada por la violencia, informe de gestión, enero 2000-junio de 2001*, Bogotá.
- ROMERO, Mauricio(2002): *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*, Bogotá, Planeta-IEPRI.
- ROSERO, Carlos (2001): "Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia", ponencia presentada al Simposio Internacional Pasado, Presente y Futuro de los Afrodescendientes, Cartagena de Indias.
- URREA, Fernando (2003): "Patrones de segregación urbana de la población afrocolombiana y migrantes recientes a causa del conflicto armado en Cali", ponencia presentada en el simposio "Guerra en el Pacífico, Bogotá, Universidad Nacional.
- VAN CREVELD, Martin (1991): *The Transformation of War*, Londres, Free Press.
- VILLEGAS, Jorge y YUNIS José (1979): *La guerra de los mil días*, Bogotá, Carlos Valencia Editores.
- WEST, Robert (1957): *The Pacific Lowlands of Colombia*, Baton Rouge, Louisiana State University Press.
- WETTSEIN Germán, (1995): "Los impunes, una minoría peligrosa", *Nueva Sociedad*, n°. 111, Caracas.
- WHITTEN, Norman (1986): *Black Frontiersmen: Afro-Hispanic Culture of Ecuador and Colombia*, Prospect Heights III, Waveland Press.